

Interludio incierto

G. Buster

La primera reacción al No francés y neerlandés /1 en las instituciones comunitarias y en amplios sectores de la oligarquía europea fue intentar contener el pánico y que no afectase la cotización del euro. El semanario *Stern* publicó el 1 de junio la noticia de una reunión del ministro de Finanzas Eichel y del presidente del Bundesbank Weber con sectores privados en la que supuestamente se habría especulado con la vuelta al marco alemán. La noticia fue rápidamente desmentida por todos los presentes, que puntualizaron que sólo se trataba de “comentarios hipotéticos en voz alta que se habían llevado demasiado lejos”. El “padre” del Banco Central Europeo, Duisenberg, declaró desde su retiro, en lo que sería su testamento, que el BCE continuaba funcionando “como siempre” (“business as usual”). Pero el euro descendió a su nivel más bajo frente al dólar en ocho meses, sin por ello acercarse a la paridad, ni causar demasiados movimientos defensivos.

El Consejo Europeo de junio del 2005 y el “Plan D”

Los presidentes de la Comisión, Barroso, y del Parlamento Europeo, Borrell, hicieron una declaración conjunta y se convocó una sesión extraordinaria del Parlamento en Estrasburgo para reiterar las líneas generales del “Plan B” /2 y de paso votar contra la primera moción de censura contra Barroso. Pero la prueba de que el Tratado Constitucional había quedado congelado políticamente tras el No francés y neerlandés fueron, por una parte, la reunión bilateral Schroder-Chirac en Berlín para reafirmar su alianza como “motor europeo” en el Consejo de junio del 2005 y su fe en las “cooperaciones reforzadas” y, por otra, las “profundas dudas sobre la orientación del proceso de construcción europeo” expresadas desde Londres por Blair y Straw como preámbulo de la nueva presidencia comunitaria británica. La reacción inmediata de reafirmar la “vieja” y la “nueva” Europa y la lucha por el liderazgo europeo puesta al descubierto por la Guerra de Irak fue más significativa que cualquier “Plan B”.

1/ Este artículo es continuación de Buster G. (2005). “El No francés puede abrir la puerta a otra Europa posible”, *Rebelión* (www.rebellion.org) 30/05/2005. Ver también Malewski, J. (2005) “*Une crise de la construction de la Union neolibérale*”, *Inprecor* (www.inprecor.org) nº 507-508, julio-agosto 2005. El mismo número de Inprecor publica un dossier con artículos de Laurent Carasso, Willem Boss y Bjarke Friborg. Asimismo, ver el artículo de Watkins, S. (2005) “Continental Tremors” en *New Left Review* (www.newleftreview.net) nº 33, mayo-junio de 2005.

2/ El famoso “Plan B” en caso de derrota, que según Giscard no existía, podía consultarse en internet en la web de la Fundación Bertelsmann hasta finales del mes de mayo. Consistía en:

- continuar con el proceso de ratificación en la UE y reiterar que el Tratado Constitucional no esta muerto ni su contenido es renegociable;
- repetir el referéndum en un año, siguiendo el precedente irlandés;
- comenzar a aplicar por la vía de los reglamentos comunitarios, las decisiones del Consejo y los acuerdos inter-gubernamentales partes sustanciales del Tratado Constitucional;

- en caso de no ratificación definitiva del Tratado, ir a una reforma del Tratado de Niza, incorporando capítulos sustanciales del Tratado Constitucional en un nuevo Tratado “Niza Plus”, que no tendría que ser sometido a referéndum mas que en Irlanda y Dinamarca.

El problema de este “Plan B”, más allá de la voluntad política que refleja, es que es difícilmente imaginable un nuevo referéndum en la situación política francesa antes de las presidenciales del 2007. Que por otra parte daría pie a argumentar que por qué no se celebra también en aquellos Estados miembros como en España donde el SI ha triunfado con menos de un 50% de participación.

Sin embargo, en esa lucha por el liderazgo no todos participaban con las mismas posibilidades, como pondría de manifiesto el debate sobre las Perspectivas Financieras 2007-2013 en el Consejo Europeo de 16 y 17 de junio, verdadero primer test de los efectos del No. Reino Unido fue capaz de bloquear la propuesta de consenso elaborada penosamente por la presidencia luxemburguesa, al condicionar cualquier debate sobre el “cheque británico” a una nueva reforma con recortes sustanciales de la Política Agraria Común. Pero al hacerlo, rompió con Polonia y con la posibilidad de resucitar a la “nueva Europa”. El bloqueo temporal de la negociación fue un jarro de agua para los gobiernos de los nuevos Estados miembros, mucho peor que el propio No francés. A este “aplazamiento” se sumó el de la creación del cuerpo diplomático europeo, previsto en el Tratado Constitucional y con el que Solana intentó comprobar la voluntad de los Estados miembros de continuar avanzando, a pesar de todo, por el camino de las “cooperaciones reforzadas” intergubernamentales.

En definitiva, cuando llegó la hora de hacer balance del proceso de ratificación del Tratado Constitucional, tras exigir explicaciones a Chirac y Balkenende, se enteró en un comunicado aparte el “Plan B” a cambio de acordar un “Plan D”, con un período de aplazamiento de dos años para “el debate y la discusión”. El comunicado aseguraba a los europeos que todo se hacía por su bien, se reafirmaba el método seguido, los valores y la visión. Se apuntaba que todo había sido consecuencia de las dificultades económicas que acompañan inevitablemente la globalización. Y que mientras se debatía y discutía, se adaptaría el calendario de ratificaciones a las necesidades de cada Estado miembro. Inmediatamente, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Polonia, Irlanda y la República Checa cancelaron los referendos previstos. Sólo Luxemburgo, con el primer ministro Juncker -comprometiendo todo su prestigio personal para salvar el escaso legado de su presidencia comunitaria- confirmó que iría a las urnas el 10 de julio, como estaba previsto.

Si el Tratado Constitucional pretendía legitimar el *statu quo* del funcionamiento comunitario, el Consejo Europeo consagró el *statu quo* de crisis para los próximos dos años. Enfrentados a un problema irresoluble, dejaron su gestión “*bussiness as usual*” a las instituciones comunitarias, a la lógica del mercado único y al tiempo. Como apostilló en su editorial *Le Monde*: “*El impulso político se ha roto*”.

Una peligrosa incertidumbre y la propuesta de Blair

Tras el Consejo Europeo de junio, el “debate y la discusión” prometidos por el “Plan D”, también se aplazaron hasta después de las merecidas vacaciones. Ha habido la victoria del Sí luxemburgués, con un altísimo 43,48% de No en el país con el nivel de renta más alto de Europa y la legislación bancaria más opaca. Y los presidentes de Alemania, Austria, Italia, Finlandia, Polonia, Portugal y Letonia escribieron el 15 de julio una carta abierta que acusa a la *euroburocracia* de Bruselas y a sus propios primeros ministros de no haber llevado el debate a los ciudadanos y de falta de transparencia. Pero no da una sola solución para impulsar el crecimiento del mercado único, “acompañado de su componente social”, que no sea mantener el *statu quo* y los acuerdos pactados.

Mientras tanto, el resultado de las elecciones alemanas han confirmado la encrucijada en la que se encuentra el proyecto neoliberal europeo, en el país que junto a Francia es el motor del proceso de construcción europea. La derrota final de Schroder, en pleno declive electoral, y la escisión en su partido por la izquierda – la primera desde hace casi ochenta años- para, junto al PDS, constituir el Partido de la Izquierda, son la expresión electoral de la protesta popular contra las políticas neoliberales de su Gobierno. Los importantes resultados del Partido de la Izquierda, a pesar de la presión del “voto útil” contra Merkel, demuestran un desplazamiento a la izquierda del electorado. Si la fórmula de recambio institucional es una “gran coalición” CDU-PSD, es porque esta fórmula de “excepción” es ya la única posible para seguir aplicando las políticas neoliberales, cuya falta de legitimidad ha provocado la derrota de Schroder. Se abren así importantes expectativas para la reconstrucción de la izquierda alternativa en un país clave como Alemania.

Poco le cabía esperar a la burguesía europea de la presidencia británica, a quien le ha correspondido gestionar el primer cuarto de tiempo del aplazamiento previsto. Blair, a pesar de demostrar que había leído los reveladores Eurobarómetros sobre las causas del No en Francia y Países Bajos y de asegurar ante el Parlamento Europeo que su visión de Europa “*se basa en un fuerte contenido social*”, aprovechó el verano para sustituir el Consejo Europeo de octubre, que tenía que reabrir las negociaciones sobre el presupuesto europeo, por una “discusión informal” -los jefes de gobierno y primeros ministros europeos a solas- sobre como liberalizar el “modelo social europeo”.

Barroso, en un intento de legitimar su débil presidencia de la Comisión quiso adelantarse a Blair en esta línea. En septiembre anunció una campaña para abolir medidas de homogenización en la legislación social europea de más de 60 directivas comunitarias, entre ellas el número máximo de horas de trabajo al aire libre, que Barroso consideraba un “chiste”. La reacción de la CES fue inmediata y John Monks amenazó con una cadena de protestas. El Parlamento Europeo prefirió escabullirse y dejar a los Estados miembros la adopción de medidas específicas para recortar el alcance social de las directivas comunitarias.

En realidad, el “aplazamiento” del proceso de ratificación del Tratado Constitucional acordado en el Consejo Europeo de junio implica una vuelta al escenario principal de las correlaciones de fuerzas de la lucha de clases en cada Estado miembro, dejando a un lado, por el momento, el mecanismo comunitario construido por encima de ellas. Sin alterar sustancialmente la correlación de fuerzas en los principales Estados miembros, que se ha ido modificando lenta pero continuamente desde 1995 en la resistencia a las políticas neoliberales, no puede haber una recuperación del proyecto de construcción neoliberal europeo. Y esa fue la consigna de *realpolitik* de Blair en su último mandato como primer ministro británico y presidente del Consejo Europeo. Su propuesta es una “cooperación reforzada” para cambiar la correlación de fuerzas a favor de las fuerzas políticas capaces de aplicar las políticas neoliberales en la Unión Europea.

Porque mientras no se cambie esa correlación de fuerzas, el resto de los proyectos neoliberales europeos -en especial la aplicación de la Agenda de Lisboa en sus

aspectos de aumento de la productividad con nuevas inversiones en ciencia y tecnología, la “selección de ganadores” entre las multinacionales europeas reestructuradas y la integración plena de los nuevos Estados miembros y los previstos en los Balcanes- tendrán también que ser “aplazados”.

La resistencia sindical se extiende

La propuesta de Blair tiene algunos inconvenientes y contradicciones para la oligarquía europea. No hay por delante una perspectiva de recuperación sostenible del crecimiento económico que permita amortiguar esta llamada al enfrentamiento social mediante la cooptación de nuevos sectores del movimiento obrero (con la excepción temporal de España e Irlanda). Por el contrario, la estrategia de recuperación económica de la oligarquía europea pasa por un importante ajuste salarial para ganar competitividad exportadora frente a un dólar que sigue depreciándose frente al euro, y las multinacionales anuncian importantes planes de reestructuración, sobre todo en el sector automotriz, con fuertes reducciones de empleo. La situación electoral en Francia e Italia es de fuerte polarización, y la de Alemania y Polonia de inestabilidad a pesar de la formación de la coalición CDU-PSD o de la victoria de la derecha del PIS y el PO. El propio Reino Unido es una muestra de ambas características y además sigue hundido en el pantano geoestratégico de Irak.

La prueba de ello han sido las huelgas y manifestaciones el 4 de octubre en Francia y el 7 y el 28 de octubre en Bélgica contra las políticas neoliberales de Villepin-Sarkozy y Verhofstadt, que daban salida nacional a toda una serie de conflictos acumulados en los últimos meses en ambos países. Y en esta ocasión, no sólo participaba masivamente el sector público, sino también toda una serie de empresas en lucha en el sector privado y SUD-PTT y la CGT franceses y la FGT belga eran capaces de arrastrar a otros sindicatos.

Francia y Bélgica no fueron el único escenario de las luchas sindicales después del No. En España, la huelga de la minería del carbón el 2-6 de noviembre, a pesar de su limitación geográfica y los trabajadores implicados (unos 8.500), fue capaz de arrancar importantes concesiones al gobierno Zapatero. El 24 de noviembre tuvo lugar la mayor demostración sindical en Eslovenia, con unas 40.000 personas, convocada por los cuatro sindicatos mayoritarios contra la política neoliberal del gobierno. Ese mismo mes, en los márgenes de la UE, pero sometida a las condiciones de la ampliación, Rumania vivía un amplio movimiento de huelgas y manifestaciones contra los presupuestos del 2006.

Esta ola de luchas obreras ha tenido dos nuevos momentos álgidos en Grecia y en Alemania. En el primer caso, con un fuerte movimiento sindical, iniciado con huelgas del 12 al 17 de noviembre, que acabó desembocando en una huelga general masiva de los sectores público y privado por aumentos salariales y contra la reforma laboral en el sector público el 14 y 15 de diciembre. En el segundo, Verdi, el mayor sindicato del sector público de un Estado miembro, se lanzó por primera vez a una huelga en 14 años contra el aumento de 38,5 a 40 horas de trabajo semanal y por el reconocimiento a nivel de *lander* de los acuerdos firmados con las autoridades municipales y federales. El otro gran sindicato alemán, IG Metal comenzaba

las negociaciones salariales para sus 3,4 millones de afiliados exigiendo una subida del 5% frente a una inflación del 2% y preparando movilizaciones.

Pero aunque la coordinación daba un paso adelante en algunos Estados miembros, no era suficiente para frenar las políticas neoliberales de los gobiernos y menos aún los planes de reestructuración de las grandes multinacionales, como están comprobando los trabajadores del automóvil en toda Europa, incluyendo los 660 despedidos de SEAT. Sin un frente único sindical y una coordinación europea, los gobiernos y las empresas europeos siguen siendo capaces de jugar con un amplio margen de maniobra, a pesar del amplio apoyo popular a las movilizaciones sindicales.

La prueba contraria más evidente ha sido el triunfo de los sindicatos de estibadores europeos que, gracias a su fuerte coordinación europea e internacional, consiguieron el 16 de enero parar prácticamente todos los puertos y organizar una manifestación de más de 6.000 trabajadores en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo. Ante la combatividad de los huelguistas y de los manifestantes, y su poderoso *lobby* institucional, el Parlamento Europeo no tuvo más remedio que rechazar la propuesta de la Comisión de directiva de liberalización del sector portuario, la “Bolkestein del mar”.

El respiro: la aprobación de las Perspectivas Financieras

El Consejo Europeo de 15 y 16 de diciembre, con el que concluyó la Presidencia británica de la UE, supuso un tímido relanzamiento del proyecto neoliberal europeo con la aprobación de las Perspectivas Financieras 2007-2013, la adopción de un enfoque común sobre emigraciones, la codificación de la estrategia europea contra el terrorismo y la decisión política de relanzar un debate sobre el futuro de Europa en los próximos seis meses, bajo la Presidencia austriaca de la UE, que prepare el terreno para una nueva ofensiva a favor del Tratado Constitucional neoliberal en el 2007, bajo presidencia alemana.

Un relanzamiento doblemente peligroso, porque ha tenido lugar en parte gracias a las dificultades de la izquierda de pasar de la resistencia a la propuesta de alternativas políticas y sociales de cómo construir Europa. A pesar del lanzamiento del Partido de la Izquierda Europea, de iniciativas como las Conferencias Europeas, los efectos políticos del No francés y holandés comienzan a disiparse lentamente ante la falta de instrumentos políticos que permitan acumular y concentrar los efectos de las campañas por el No y las movilizaciones sindicales.

No fue casualidad tampoco que la gran heroína de este Consejo fuera la canciller Merkel, que ya ha anunciado que hará de la defensa del Tratado Constitucional el eje de su presidencia europea en el 2007. A pesar del giro a la izquierda en Alemania con el surgimiento impetuoso del Partido de la Izquierda, el resultado final ha sido la “gran coalición” de cristiano-demócratas y social-demócratas para seguir aplicando las políticas neoliberales. Y ello ha pesado finalmente en toda la UE para salir del atolladero en el que estaba el proyecto neoliberal.

Las Perspectivas Financieras 2007-2013 finalmente aprobadas suponen sin duda una frustración de las expectativas iniciales de los nuevos estados miembros tras la ampliación. Pero la alternativa era seguir profundizando la crisis de la UE y retra-

sar en el mejor de los casos la recepción de fondos estructurales y de cohesión que se les prometió a cambio del gran ajuste neoliberal para su ingreso. Han sido las burguesías periféricas de la Unión, los países del Este, los que han aceptado sacrificar la solidaridad con los pobres en nombre de las necesidades de los ricos para salir cuanto antes del pantano en el que se encuentra la UE. En cifras, eso ha supuesto un recorte de 160.000 millones de euros en relación con la propuesta inicial de la Comisión, lo que está muy lejos de las necesidades de solidaridad en una Europa que crece por debajo del 1,5% y tiene una tasa de paro cercana al 10%.

Ni Alemania ni Francia hicieron grandes concesiones, como pretendía Blair, sobre todo en relación con la Política Agraria Común. El eje Berlín-París-Madrid se ha consolidado en todo caso frente a un Blair que ha tenido que aceptar por primera vez pagar su cuota de los costes de la ampliación, reduciendo proporcionalmente el “cheque británico” /3.

El gobierno Zapatero salió mejor librado de lo que esperaba, al mantener los fondos de cohesión cinco años más, a pesar del efecto estadístico de la ampliación y de crecer muy por encima de la media comunitaria. En total obtendrá un saldo neto favorable de 16.181 millones de euros en estos cinco años, probablemente por última vez antes de ser un contribuyente neto. Será entonces cuando el problema de la redistribución solidaria entre territorios del Estado español se plantee con toda crudeza.

La política de emigración comunitaria sigue priorizando ante todo el enfoque “seguritario”, que hemos visto en acción en Ceuta y Melilla. El proyecto más importante es construir una barrera electrónica en todo el Sur de la UE, además de reforzar la negociación de acuerdos de extradición de emigrantes, condicionando la ayuda al desarrollo a la colaboración de los gobiernos africanos en estas tareas. Porque las ayudas prometidas a África no serán ni de lejos capaces de hacer frente a la pobreza creada por la aplicación del neoliberalismo.

Pero lo más importante del Consejo Europeo de diciembre del 2005 fue la voluntad patente de retomar la iniciativa política por parte de los principales gobiernos europeos y la Comisión, con el apoyo de las grandes multinacionales europeas. Bajo las presidencias de Austria y Finlandia, 2006 se anuncia como un año en el que los gobiernos de los Estados miembros intentarán cambiar la correlación de fuerzas nacional para relanzar en el 2007, con renovado vigor, el proyecto constitucional neoliberal bajo las presidencias de Alemania y Portugal.

Preparando el “Plan E”

No existe aún, sin embargo, consenso de cómo hacerlo. Pero Blair pudo resumir su necesidad: *“Una UE de los 25 no puede funcionar con las actuales reglas de gobernanza. En mis seis meses de presidencia he sido un buen testigo de ello”*. Y el comisario Verheugen ha recordado el carácter estratégico del proyecto de unión política neoliberal europea *“aunque no todos los Estados actuales de la UE forman parte de ella”*.

3/ El volumen total para los siete años supone los 862.036 millones de euros, el 1,045% del PIB europeo, que se sitúa a medio camino de la propuesta luxemburguesa (1,06%) y la británica (1,03%). Las ayudas a los nuevos Estados miembros alcanzan los 157.000 millones de euros, aunque con una tasa de cofinanciación menor, pasando del 10% al 15%. La reducción del “cheque británico” es de 10.500 millones de euros, 2.500 más que los aceptados por la presidencia británica. A cambio, Reino Unido ha obtenido una cláusula de revisión del conjunto de las Perspectivas Financieras en el 2009, con una propuesta de la Comisión al Consejo Europeo, que seguirá aprobando por unanimidad el presupuesto comunitario.

Para el propio Blair o para Sarkozy -en su conferencia en la Fundación Adenauer en febrero del 2006- no se puede volver al texto del Tratado rechazado. Pero sí ir poniendo en vigor a partir del año 2008 elementos como la Presidencia permanente del Consejo, la extensión del voto cualificado en algunas áreas, como la cooperación judicial, o la designación de un ministro comunitario de Asuntos Exteriores. Para preparar este proceso, un “equipo evaluador” podría visitar las capitales europeas. Y en el 2009, tras las nuevas elecciones al Parlamento Europeo, convocar una nueva convención. Una “cooperación reforzada” específica en este campo entre Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Polonia debería liderar el proceso.

Sin embargo, Angela Merkel o Miguel Ángel Moratinos han manifestado su defensa del texto constitucional ratificado en sus países por el parlamento o en referéndum. Aunque se podría incluir una declaración de principios sociales y políticos que justificase de nuevo el proceso de ratificación en Francia y Países Bajos, quizás después de una nueva convención en el 2009 o 2010. Merkel, al mismo tiempo, ha aprovechado para rechazar la propuesta francesa de “cooperación reforzada” y convertirse en la defensora de los intereses de los Estados miembros medianos y pequeños.

Las mismas dudas han surgido en el Parlamento Europeo y en muchos de los parlamentos de los Estados miembros. A mediados de enero, el Parlamento Europeo adoptó por 385 contra 125 votos las propuestas del Informe Duff/Voggenhuber de organizar durante los próximos dos años foros parlamentarios y ciudadanos que preparen las condiciones para un reinicio del proceso de ratificación, tras la adopción de las modificaciones o añadidos necesarios. Pero antes mismo de la votación, los presidentes de los parlamentos de Austria, Finlandia y Alemania -es decir, la actual y las dos próximas presidencias- enviaron una carta a Borrell limitando los foros a un solo encuentro entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados miembros para un simple “intercambio de opiniones” y en ningún caso para preparar una posición común que trasladar al Consejo Europeo.

La disyuntiva política ante la que se encuentra la burguesía europea no está aún resuelta. Probablemente pasará por sucesivas fases de tanteo. Tampoco parece que exista capacidad para generar de verdad un “Plan E” para recuperar el proceso de construcción europea neoliberal, sin cambios previos en la correlación de fuerzas. Por lo tanto, la hipótesis más probable, por el momento, es que se mantendrá el horizonte de la ratificación del Tratado Constitucional, o al menos de sus contenidos “fuertes”, evitando reabrir negociaciones globales sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias o la articulación de intereses en su seno. La opción de las burguesías europeas parece ser partir de batallas concretas en cada estado miembro en los temas sociales y de la Agenda de Lisboa. Y a nivel comunitario ir consensuando soluciones parciales de mínimos, como ha ocurrido con la adopción de las nuevas Perspectivas Financieras, en el proceso de ampliación y las negociaciones con Turquía. Sobre esta base se podría abrir una nueva discusión sobre el Tratado Constitucional en el 2007.

A nivel comunitario, el primer pulso real en las instituciones europeas sobre las políticas neoliberales ha tenido lugar con la Directiva Bolkestein para la liberalización de los servicios. En la campaña por el No en Francia, la imagen del fontanero

polaco se convirtió en el símbolo del “dumping social” que implica la aplicación de la cláusula de “país de origen” a la liberalización de los servicios en un mercado único en el que, sin embargo, existen fuertes asimetrías y desigualdades en unas políticas sociales y laborales que son competencia exclusiva de los Estados miembros.

La directiva Bolkestein como ejemplo y la “flexiseguridad”

El pulso era fundamental, porque el 70% de los actuales empleos europeos pertenecen al sector servicios. Y la creación de las condiciones para la aplicación de la reforma laboral en los Estados miembros -con aumento de horas de trabajo semanales, abaratamiento de los despidos, aumento de la precariedad y reforma del sistema de pensiones haciendo recaer su financiación en el IRPF-, dependen en parte, como recordaba el *Financial Times* (17/2/06), de demostrar que se puede derrotar a la CES que, durante dos años, se ha opuesto a la Directiva Bolkestein.

Tras el rechazo de la propuesta original de la Comisión, que liberalizaba radicalmente el sector servicios, el Parlamento Europeo ha tenido un largo debate que ha reflejado el tira y afloja de la actual correlación de fuerzas. Más de 400 enmiendas han sido discutidas, más de la mitad de las cuales eran del bloque de la derecha formado por conservadores y liberales. Pero lo decisivo ha sido el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, premonitorio quizás en cuanto a que debemos esperar del debate sobre el Tratado Constitucional después del No.

El acuerdo alcanzado excluye la cláusula de “país de origen” -por el que una empresa subcontrata puede aplicar en sus relaciones laborales la legislación del estado miembro en el que esta registrada y no del que opera- y también a las empresas de servicios sociales, sanitarios, de transportes, audiovisuales o de empleo temporal. Pero mantiene la liberalización en el área de la cultura, la educación y los servicios básicos públicos como agua, residuos, electricidad o gas. La votación final fue de 391 votos a favor, 213 en contra y 34 abstenciones. 30.000 manifestantes, convocados en Estrasburgo por la CES, se manifestaban en contra de la Directiva Bolkestein a las puertas del Parlamento Europeo.

El comisario de mercado único, McCreevy, saludó el resultado como “*un avance importante, que no hubiéramos creído posible hace sólo doce meses y que nos da una sólida base para avanzar*”. La Comisión recogerá las propuestas del Parlamento Europeo y propondrá un nuevo texto de directiva al Consejo Europeo en las próximas semanas. También ha prometido que propondrá nueva legislación para los sectores de servicios excluidos por el Parlamento Europeo.

El mejor ejemplo del que disponemos para ilustrar la actual situación interna en la UE es el proceso que ha conducido a este resultado. Muestra no sólo la determinación de la oligarquía europea de continuar tenazmente avanzando en su proyecto neoliberal de construcción europea y el bloque de fuerzas políticas en el que se apoya. También el efecto de una derrota política como han sido el No francés y neerlandés, la erosión de ese efecto y la necesidad de un salto cualitativo en la coordinación y extensión de la resistencia sindical, si quiere tener éxito.

Quizás no convenga olvidar tampoco cual es la alternativa a una derrota de la resistencia sindical al proyecto neoliberal. El Consejo Social informal de 19-21 de enero en Villach, Austria, ha comenzado a popularizar un nuevo concepto comunitario, la “flexiseguridad”. La definición del mismo del comisario Spidla no puede ser más elocuente: *“la flexiseguridad esta basada en la protección de la gente y no en la protección del empleo; Europa necesita más seguridad y más flexibilidad y la flexiseguridad está basada en la cohesión de todo el sistema social”*. Traducido de la neologuía comunitaria al castellano empresarial de estos días, quiere decir que el mercado desarrollará una oferta de seguridad social para el sector de la demanda que pueda permitirse pagar por ella, con una red mínima de asistencia social.

El Consejo Social, con la asistencia de ministros, patronales, sindicatos y ONGs, enfatizó también la necesidad de avanzar en la coordinación transversal de las políticas sociales de los Estados miembros en la aplicación de la *“dimensión social de la Estrategia de Lisboa”*, lo que es un aviso de la nueva oleada de ataques contra el pretendido “modelo social europeo”.

Levantar una alternativa de izquierdas

La profundidad de la crisis del modelo de construcción neoliberal de la Unión Europea tras el No francés y neerlandés depende en buena medida de si se extienden las luchas sociales en toda la UE y si la izquierda del No es capaz de ofrecer y construir una alternativa política, tanto a nivel de cada Estado miembro como a nivel europeo. Esa alternativa política es imprescindible para cuestionar ese “aplazamiento” de dos años de la clase política europea neoliberal. Y para hacer frente a la ofensiva en cada Estado miembro de la UE para recortar los derechos sociales, dividiendo a la clase obrera y aumentando las desigualdades, en una segunda contrarreforma democrática tras los recortes de las libertades cívicas en nombre de la lucha antiterrorista, cuyos efectos han quedado de manifiesto en las revelaciones sobre los vuelos y las cárceles secretas de la CIA en Europa.

Además de la resistencia a nivel de cada Estado miembro, hay que ofrecer un “Plan B” de la izquierda para dar un giro de 180 grados en el proceso de construcción europea, rompiendo con el neoliberalismo. Es necesaria una propuesta de Constitución Europea que recoja los derechos sociales y proteja un auténtico “modelo social europeo”, poniendo las bases de una Europa de los Ciudadanos que tenga en un Parlamento Europeo con poderes reales su centro de legitimidad e iniciativa legislativa. Para ello, las próximas elecciones al Parlamento Europeo en el 2009 deberían abrir un auténtico proceso constituyente europeo. Un Parlamento Europeo que, en debate abierto y público, elaborase una Constitución Europea que fuese sometida a un único referéndum europeo y ratificada por todos los ciudadanos de la UE.

Para hacer frente a estos retos, tanto en cada Estado miembro como en el marco de la UE, la izquierda necesita una táctica unitaria de acumulación de fuerzas que supere todos los sectarismos del pasado y se plantee las tareas que tiene que acometer en el presente y en el futuro desde nuevas formulas políticas. La campaña unitaria por el No en Francia es un ejemplo que hay que extender, combinando la movilización social de resistencia con la construcción de plataformas organizativas,

como los Comités por el No. Asimismo, la creación y el éxito electoral inicial del Partido de la Izquierda en Alemania es otro ejemplo de este proceso y de su concreción a nivel de una fuerza política electoral. En cada Estado miembro de la UE el proceso de acumulación de fuerzas de la izquierda alternativa adoptará una fórmula distinta. Lo importante es que la experiencia conjunta de resistencia cobre una forma organizativa unitaria desde los niveles más inmediatos de barrio, centro de estudio o de trabajo, hasta las coordinaciones sindicales y las plataformas de organizaciones políticas. Esa será la mejor base para poder proyectar institucionalmente en el terreno electoral la capacidad de resistencia.

Los tanteos de la izquierda en este sentido a nivel europeo siguen siendo claramente insuficientes. El Partido de la Izquierda Europea es todavía un foro de debate, anclado en muchos casos en la ilusión de poder reconstruir una “izquierda plural” sin hacer un balance de las políticas socioliberales que ha aplicado o evitando el debate de fondo estratégico sobre el neoliberalismo y el carácter de ruptura de una alternativa de izquierdas. Las Conferencias Europeas por el No, que se han reunido en París y Estambul, han permitido avanzar el debate programático de que alternativa de izquierdas es necesario ir construyendo frente al modelo europeo neoliberal. Pero queda mucho camino por recorrer en este sentido. Algo parecido ocurre con los Foros Sociales Europeos, que son el lugar de encuentro y concertación del conjunto de los movimientos sociales. La cita de mayo en Atenas debe permitir avanzar en una “hoja de ruta” de campañas de resistencias concretas, de consensuar elementos de alternativa para una Europa de los trabajadores y de los pueblos e impulsar la construcción de Foros sociales locales.

Las grandes centrales sindicales, agrupadas a nivel europeo en la CES, siguen acumulando importantes contradicciones en su seno. El ciclo de luchas obreras que se extiende desde 1995 responde a la presión por abajo de los trabajadores, de las organizaciones sindicales minoritarias y de sectores más radicales de los grandes sindicatos, que han obligado a las direcciones sindicales a convocar importantes huelgas sectoriales e incluso a nivel estatal en la práctica totalidad de los estados miembros.

El “pacto social europeo” que unía a las direcciones de los grandes sindicatos de la CES con la burocracia comunitaria y el proyecto de construcción europeo se ha ido erosionando y perdiendo legitimidad, sin que las direcciones sindicales de la CES tengan aún una alternativa a la izquierda ni se atrevan a coordinar una auténtica resistencia social a nivel europeo. Por ello es importante combinar las iniciativas unitarias de resistencia social a nivel de empresa -desbordando si es necesario a las direcciones sindicales burocráticas-, con propuestas de coordinación regional o sectorial y estatal unitarias que impliquen a la mayoría de los afiliados de los grandes sindicatos y sus direcciones. Se ha abierto un espacio no solo para iniciativas de izquierda sindical capaces de impulsar luchas en los estados miembros e incluso de lanzar iniciativas a nivel europeo como las Euromarchas, sino de coordinar la actividad de resistencia sindical en las grandes empresas europeas, sobre todo del sector automotriz y aeronáutico.

G. Buster es miembro de la redacción de *VIENTO SUR*.
